

UNIVERSIDAD DE HUANUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
PROGRAMA ACADÉMICO DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



TÉSIS

**“DEBIDO PROCESO Y FUNCIÓN DISCIPLINARIA SEGÚN LEY
29944, UGEL CHUPACA, 2019”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

AUTORA: Chaca Vélez, Edith Dinna

ASESOR: Ponce E Ingunza, Felix

HUÁNUCO – PERÚ

2020

U

D

H

**TIPO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN:**

- Tesis (X)
- Trabajo de Suficiencia Profesional()
- Trabajo de Investigación ()
- Trabajo Académico ()

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: Desarrollo de estudios en derechos sustantivos y procesales en constitucional, civil, penal, laboral, tributario, administrativo y empresarial

AÑO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN (2018-2019)

CAMPO DE CONOCIMIENTO OCDE:

Área: Ciencias Sociales

Sub área: Derecho

Disciplina: Derecho

DATOS DEL PROGRAMA:

Nombre del Grado/Título a recibir: Título

Profesional de Abogada

Código del Programa: P33

Tipo de Financiamiento:

- Propio (X)
- UDH ()
- Fondos Concursables ()

DATOS DEL AUTOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 20112559

DATOS DEL ASESOR:

Documento Nacional de Identidad (DNI): 22402569

Grado/Título: Doctor en ciencias de la Educación

Código ORCID: 0000-0003-0712-1414

DATOS DE LOS JURADOS:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	GRADO	DNI	Código ORCID
1	Peralta Baca, Hugo Baldomero	Abogado	22461001	0000-0001-5570-7124
2	Berrospi Noria, Marialena	Abogado	22521052	0000-0003-2185-5529
3	Leandro Hermosilla, Wilder Sherwin	Abogado	07637566	0000-0003-3760-6500

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las 10:00 a.m. horas del día 06 del mes de Noviembre del año dos mil veinte, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunieron la sustentante y el Jurado calificador mediante la plataforma virtual Google meet integrado por los docentes:

Abg. Hugo Baldomero Peralta Baca	: (Presidente)
Abg. Marianela Berrospi Noria	: (Secretaria)
Abg. Wilder S. Leandro Hermosilla	: (Vocal)

Nombrados mediante la Resolución N° 657-2020-DFD-UDH de fecha 02 de noviembre de 2020, para evaluar la Tesis intitulada "**DEBIDO PROCESO Y FUNCIÓN DISCIPLINARIA SEGÚN LEY 29944, UGEL CHUPACA, 2019**", presentado por la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas **Edith Dinna CHACA VÉLEZ** para optar el Título profesional de Abogada.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: Exposición y Absolución de preguntas; procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del jurado.

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) Aprobada por Mayoría con el calificativo cuantitativo de Trece y cualitativo de Suficiente.


Siendo las 11:10 a.m. horas del día 06 del mes de Noviembre del año 2020 los miembros del jurado calificador Ratificados firman la presente Acta en señal de conformidad.



Abg. Hugo Baldomero Peralta Baca
Presidente



Abg. Marianela Berrospi Noria
Secretaria



Abg. Wilder S. Leandro Hermosilla
Vocal



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 657-2020-DFD-UDH
Huánuco, 02 de noviembre de 2020

Visto, el ID 272766-0000000077 de fecha 15 de octubre de 2020 presentado por la bachiller **Edith Dinna CHACA VÉLEZ**, quien pide fecha y hora de sustentación de tesis, llevado a cabo en el Ciclo de Asesoramiento para la Tesis profesional intitulado **“DEBIDO PROCESO Y FUNCIÓN DISCIPLINARIA SEGÚN LEY 29944, UGEL CHUPACA, 2019”**, para optar el título profesional de abogada;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 14° numeral 1 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas vigente para el caso determina las diversas modalidades al cual el Graduando puede acogerse para obtener el Título Profesional de Abogada.

Que, mediante Resolución N° 292-2015-R-CU-UDH de fecha 16 de marzo de año 2015 se crea el ciclo de Asesoramiento para la tesis profesional- CATP/DERECHO del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas, en atención al Art. 36 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UDH;

Que, mediante Resolución N° 1400-2019-DFD-UDH que declara **APROBAR** el Proyecto de Investigación intitulado **“DEBIDO PROCESO Y FUNCIÓN DISCIPLINARIA SEGÚN LEY 29944, UGEL CHUPACA, 2019”** presentado por la bachiller **Edith Dinna CHACA VÉLEZ**, del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la UDH;

Que, mediante Informe N° 029-2019-UDH-FD-CATP/FPel de fecha 02 de diciembre de 2019, el Dr. Félix Ponce e Ingunza Asesor del Proyecto de Investigación **“DEBIDO PROCESO Y FUNCIÓN DISCIPLINARIA SEGÚN LEY 29944, UGEL CHUPACA, 2019”**, aprueba el informe final de la Investigación;

Que, en cumplimiento al Art. 29 del Reglamento de Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional del Programa Académico de Derecho y CC.PP vigente para el caso y a mérito del documento de visto, es pertinente emitir la Resolución de Jurado y señalar fecha y hora para su Sustentación;

Estando a lo dispuesto en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; Reglamento de Grados y Títulos aprobado con Resolución N° 466-2016-R-CU-UDH del 23 de mayo de 2016 y la facultad que indique;



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 657-2020-DFD-UDH
Huánuco, 02 de noviembre de 2020.

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - **DESIGNAR** al Jurado Calificador para examinar a la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, doña **Edith Dinna CHACA VÉLEZ**, para obtener el Título Profesional de **ABOGADA** por la modalidad de Trabajo de Investigación Científica (Tesis), llevado a cabo en el Ciclo de Asesoramiento para la Tesis profesional; a los siguientes docentes:

Abg. Hugo Baldomero Peralta Baca	: Presidente
Abg. Marialena Berrospi Noria	: Secretaria
Abg. Wilder S. Leandro Hermosilla	: Vocal

Artículo Segundo. - Señalar el día viernes 06 de noviembre de 2020 a horas 10:00 a.m. dicha Sustentación publica de manera virtual.

Regístrese, comuníquese y archívese.



DISTRIBUCIÓN: Vice. Rect. Académico, Fac. Derecho, Of. Mat. Y Reg. Acad..f. Exp. Interesado, archivo.
FCB/znn

DEDICATORIA:

A mi padre, quien siempre me acompaña y anima...

A mi madre, quien me impulsa a ser mejor cada día...

A Wolfgang y Alexander mi inspiración constante.

AGRADECIMIENTOS

A la UGEL Chupaca quienes me brindaron las facilidades para la realización de la investigación, a los docentes que prestaron su apoyo para enriquecer la investigación.

ÍNDICE

DEDICATORIA:	II
AGRADECIMIENTOS.....	III
ÍNDICE.....	IV
INDICE DE TABLAS	VI
INDICE DE FIGURAS.....	VII
RESUMEN.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
INTRODUCCIÓN.....	X
CAPÍTULO I.....	12
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	12
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	12
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	14
1.3. OBJETIVO GENERAL	14
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	14
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	15
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN	16
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN	17
CAPÍTULO II.....	18
MARCO TEÓRICO	18
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	18
2.2. BASES TEÓRICAS.....	24
2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES	37
2.4. HIPÓTESIS.....	41
2.5. VARIABLES	42
2.5.1.VARIABLE DEPENDIENTE	42
2.5.2.VARIABLE INDEPENDIENTE	42
2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.....	42
CAPÍTULO III.....	44

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN.....	44
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	44
3.1.1.ENFOQUE	44
3.1.2.ALCANCE O NIVEL.....	44
3.1.3.DISEÑO	44
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA	45
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.	46
3.3.1.PARA LA RECOLECCION DE DATOS.....	46
3.3.2.PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS.....	46
3.3.3.PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS	46
CAPÍTULO IV:	47
RESULTADOS	47
4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS	47
4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS	55
CAPÍTULO V	63
DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	63
5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.....	63
CONCLUSIONES	65
RECOMENDACIONES.....	67
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	68
ANEXOS.....	71

INDICE DE TABLAS

Tabla 1	43
Tabla 4:.....	48
Tabla 5:.....	50
Tabla 6:.....	51
Tabla 7:.....	53
Tabla 8:.....	54
Tabla 9:.....	54
Tabla 10:.....	55
Tabla 11:.....	56
Tabla 12:.....	57
Tabla 13:.....	58
Tabla 14:.....	60
Tabla 15:.....	62

INDICE DE FIGURAS

Ilustración 1:.....	47
Ilustración 2:.....	52
Ilustración 3.....	72
Ilustración 4.....	73

RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue establecer la incidencia de la aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la Ugel Chupaca, 2019.

El tipo de investigación es sustantiva, de enfoque holístico, de nivel explicativa, de diseño no experimental, descriptivo transversal.

Se trabajó con una población y muestra constituida por todos los casos disciplinarios a docentes con sanción firme con resolución directoral al año 2019.

Se aplicó una ficha de observación de expedientes a los expedientes que conforman la muestra, llegando a la conclusión: Existe relación significativa entre el debido proceso y la función sancionadora según Ley 29944, UGEL Chupaca, 2019, al respecto la norma se fundamenta en el derecho administrativo, respetando las garantías del debido procedimiento administrativo, que son respetadas en cuanto quien ejerza la potestad sancionadora tenga conocimiento de la misma, quedando el riesgo de no ser cumplida puesto que los directivos no siempre tienen una formación en derecho.

Tema Eje: Debido proceso, potestad sancionadora.

ABSTRACT

The objective of the investigation was to establish the incidence of the application of the principle of due process as a fundamental right in the control of the disciplinary function according to Law 29944 in Ugel Chupaca, 2019.

The type of research is substantive, holistic approach, explanatory level, non-experimental design, cross-sectional descriptive.

We worked with a population and sample constituted by all disciplinary cases to teachers with firm sanction with directive resolution to the year 2019.

A file observation file was applied to the files that make up the sample, reaching the conclusion: There is a significant relationship between due process and the sanctioning function according to Law 29944, UGEL Chupaca, 2019, in this regard the rule is based on the law administrative, respecting the guarantees of the due administrative procedure, which are respected as soon as the person exercising the sanctioning authority has knowledge of it, leaving the risk of not being fulfilled since the managers do not always have a law training.

Theme Axis: Due process, sanctioning power

INTRODUCCIÓN

La última reforma normativa del magisterio peruano se visualiza en la Ley de la Reforma Magisterial No 29944, en la que se otorga potestad sancionadora disciplinaria a los directivos de las instituciones educativas en concordancia con los artículos 80.2 y 81.2, la que puede ejercer sobre los docentes y auxiliares de educación, en tal contexto se involucra a los directivos en el ejercicio del derecho administrativo, integrándolos como parte del ius puniendi que busca asegurar el cumplimiento de los deberes del ciudadano, en este caso de los docentes.

Frente a esta realidad cabe preguntarse si los docentes directivos cuentan con la debida capacitación en derecho administrativo que aseguren una adecuada actuación frente a las faltas que puedan cometer sus subalternos, considerando además como precedentes que existe un 45% de sanciones, en la Ugel Chupaca, que vienen siendo judicializadas en busca de restablecer derechos de los docentes que aparentemente fueron vulnerados, en tal sentido la investigación se centra en realizar una investigación descriptiva de los casos de sanción con resolución directoral de la Ugel Chupaca con el objetivo de fue “establecer la incidencia de la aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la Ugel Chupaca, 2019”, el cual fue desarrollado a través de los siguientes capítulos:

En el Capítulo I, se detalla lo referente al planteamiento del problema, se desarrolla la descripción de la realidad problemática, se formulan los problemas, los objetivos y la justificación de la investigación y la viabilidad.

En el Capítulo II, corresponde al marco teórico y conceptual, donde se explora los antecedentes, se analizan las bases teóricas de este estudio y la definición de los términos básicos, así como las variables.

En el Capítulo III, se aborda la metodología de la investigación, abarca el tipo y diseño de la investigación, la población y muestra, asimismo las técnicas para la recolección de datos, la descripción de los instrumentos

para el manejo de información, así como también la validez y confiabilidad de instrumentos, además las técnicas para el procesamiento y análisis de los datos.

En el Capítulo IV, se analizan los resultados de la investigación, se desarrolla la presentación e interpretación de los datos obtenidos en tablas, gráficas y figuras, y la descripción del grado de relación que guardan las variables de estudio.

En el Capítulo V, se presenta la discusión de resultados, las conclusiones, recomendaciones para su perfeccionamiento y finalmente, se citan las fuentes de información, la sección de los anexos incluye los cuadros y las tablas con los resultados de la aplicación de los instrumentos.

En el Capítulo V, se presenta la discusión de resultados, las conclusiones, recomendaciones para su perfeccionamiento y finalmente, se citan las fuentes de información, la sección de los anexos incluye los cuadros y las tablas con los resultados de la aplicación de los instrumentos.

Posteriormente se considera las conclusiones y las recomendaciones respectivas.

La autora

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Según la Ley 27444, en su Artículo IV sobre los principios del procedimiento administrativo se establece que el debido proceso debe responder al principio del debido procedimiento:

Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos ...comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten ...(TUO Ley 27444, pg.37).

En este contexto, el derecho administrativo comprende la organización y el funcionamiento de toda forma de administración pública que debe ser considerado desde una doble perspectiva, primero la de procurar la eficacia de las administraciones y segundo, también garantizar los derechos de los particulares en sus relaciones con ellas.

En este sentido, jurídicamente se habla de un debido proceso, que garantice las dos perspectivas mencionadas, ya que la finalidad no es de castigar por castigar, sino de buscar un cumplimiento idóneo de la administración en la se cumplan sus objetivos.

En su afán de descentralizar la administración, el Ministerio de Educación, ha otorgado potestad sancionadora a los directores de instituciones educativas de educación básica regular, mediante Ley 29944

Ley de la Reforma Magisterial.

“...en concordancia con los artículos 80.2 y 81.2 del Reglamento de la LRM, se otorga potestad sancionadora disciplinaria al director o directora de la institución educativa sobre el profesor o profesora que ejerce labor en aula, personal jerárquico y subdirector o subdirectora de la misma ...” (2016, pg. 12).

Según la Enciclopedia Jurídica (2014) la función sancionadora es la facultad de la administración pública para imponer sanciones al administrado, como consecuencia de una conducta ilícita, siguiendo un procedimiento administrativo, con finalidad represora, consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición de un deber, al estar vedada para la administración pública las sanciones consistentes en privación de libertad.

Sin embargo, la aplicación de la función sancionadora, en el marco de la LRM, no contó con la orientación, capacitación alguna, sobre su aplicación, dirigida a los directivos, razón por la que se vienen cometiendo omisiones como la falta de notificaciones oportunas a los implicados, el no cumplimiento de los plazos (Ventura, 2014) e incluso aplicando duplicidad de sanciones, vulnerándose los derechos de los maestros procesados y desnaturalizando la razón de ser del procedimiento administrativo sancionador.

En este sentido, la investigación pretende brindar como aporte el estudio de las incidencias del respeto al principio del debido proceso durante la aplicación de la función sancionadora según Ley 29944, con el fin de contribuir a mejorar la administración descentralizada en las instituciones educativas y de garantizar el respeto a los derechos de los administrados, así como dar a conocer las necesidades de capacitación de los directivos en derecho administrativo, que la UGEL Chupaca debe tomar en cuenta como parte importante en la formación de los directivos.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera la aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental incide en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la UGEL Chupaca, 2019?

Y como problemas específicos:

¿De qué manera la observancia al debido proceso incide en la previsión de las consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019?

¿De qué manera el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional incide en el tipo de conductas sancionadora administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019?

¿Cómo el reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos, incide en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019?

1.3. OBJETIVO GENERAL

Establecer la incidencia de la aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la Ugel Chupaca, 2019.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer la incidencia de la observancia del debido proceso incide en la previsión de las consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

Establecer la incidencia del cumplimiento de los procedimientos

establecidos en el ámbito jurisdiccional de la conducta sancionadora administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

Establecer la incidencia del reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación Función Sancionadora Ley 29944 y respeto al Debido Proceso, UGEL Chupaca, 2019 se justifica plenamente desde varios aspectos como:

A nivel teórico, la investigación permitirá conocer y comprender la Ley 29944 Ley de la reforma Magisterial y desprender de ella las facultades que brinda a los directivos en los procesos sancionadores disciplinarios a sus subalternos en la institución educativa. Si bien es cierto, es una norma controvertida puesto que realiza varias modificaciones en las que restringe y otorga derechos y responsabilidades, que anteriormente no se daban, las que a través de la presente investigación permitirá aclarar dudas y orientar su aplicación correcta, puesto que existen varios procesos judicializados, en los que se reclaman la restitución de derechos vulnerados por una inadecuada interpretación o aplicación, con respecto a la función sancionadora disciplinaria.

A nivel jurídico, permite revisar la doctrina de los principios generales y específicos del derecho administrativo en cuanto a sus procedimientos, su finalidad, su legalidad y el respeto a los derechos fundamentales de la persona. De esta forma, la investigación permitirá complementar la Ley 29944 con los principios delimitadores de la aplicación debida en el derecho administrativo, permitiendo complementar adecuadamente la función otorgada a los directivos, quienes adolecen de la formación en este aspecto ya que la Ley fue implantada sin considerar un adecuado

proceso de capacitación, razón por la cual, se ve el aumento de resoluciones judicializadas por los docentes en la búsqueda de apelar el atropello a sus derechos, evidenciándose aumento de la carga procesal en la provincia de Chupaca.

A nivel personal, nos permitirá realizar un análisis, procesamiento de datos y comunicar los resultados que nos ayudarán a elaborar la defensa de la tesis que permita optar el título de abogada, asimismo, contribuir a la Ugel Chupaca brindando aportes de interpretación legal para planificar capacitaciones a los directivos en materia de derecho administrativo y la aplicación de la función sancionadora con el fin de evitar vulneración de derechos, rompimiento de relaciones entre los trabajadores y juicios de larga duración.

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación se realizará en la Ugel Chupaca, en la cual encontramos 243 instituciones educativas, con más de 300 docentes en condición de nombrados y contratados; en este sentido, contactar con todos ellos no es posible, sin embargo, la información relevante se obtendrá de la comisión de procesos administrativos de la Ugel Chupaca, con la que contactará y coordinará para obtener las resoluciones de sanción administrativa, con el fin de trabajar con los docentes que tuvieron sanciones en aplicación de la Ley 29944 con resolución, de la misma forma se coordinará con la oficina de Asesoría jurídica para identificar los casos judicializados en proceso y con sentencia.

A nivel de estudio, la investigación es de tipo descriptiva, en la que no se manipularán directamente las variables, por lo que podrá existir cierta limitación de acceso a los datos, sin embargo, se contrastará con la revisión de los expedientes en línea en el portal de consulta del poder judicial, con el fin de reducir al máximo la falta de datos.

Por otro lado, la investigación se realizará con los casos que cuentan

con resolución en el año 2019, mediante el cual se pone fin al proceso administrativo, en este sentido, existe la limitación por el tiempo, ya que cada año existen condiciones diferentes, sin embargo, el estudio al ser el primero en la Ugel Chupaca permitirá establecer una base para futuras investigaciones más profundas.

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación garantiza su seriedad y cumplimiento por contar con la viabilidad necesaria para su ejecución desarrollo y análisis como:

Viabilidad técnica, se cuenta con el apoyo del personal de la Ugel Chupaca, especialmente de las oficinas de Personal, de procedimientos administrativos y de asesoría jurídica, para el acceso respectivo a los expedientes de los docentes con sanción disciplinaria, es necesario mencionar también, que se cuenta con la página de consultas del poder judicial <https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html> , la que nos permite acceder con el número de expediente y año conocer los detalles de los procesos judicializados, permitiendo subrayar que lo mencionado nos asegura que la investigación se realice con datos e información relevante.

Viabilidad ética, cabe resaltar que la investigación se enfoca en constatar el respeto al derecho de los administrados, que nos permite contar con la predisposición de los docentes, por un lado, y por el otro, de las autoridades de la Ugel en el seguimiento de los casos y sus procesos, es decir, no se ventilará los casos en sí, sino con los procedimientos administrativos sancionadores que se realizaron en el tratamiento de los casos, en este sentido, la investigación no vulnerará ni invadirá espacios privados, brindándose facilidades para el acceso a la información que enriquece el estudio.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Tesis internacionales

(2016) MORALES CARRASCO, M. L., Universidad San Francisco de Quito USFQ, ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE DOCENTES, Tesis de Maestría, Ecuador.

El estudio tuvo como objetivo de precautelar la seguridad jurídica, el justo cumplimiento de las disposiciones legales, y el interés superior de niños, niñas y adolescentes como directos beneficiarios del servicio público de educación, con una investigación cualitativa, utilizando la metodología de estudio de casos, concluye en que la Unidad Administrativa de Talento Humano, tiene un rol fundamental en el procedimiento disciplinario, por ser la encargada de sustanciar el sumario administrativo, por lo tanto, está obligada a desarrollar todas las diligencias necesarias a la luz del debido proceso, mismas que guiarán a la Junta Distrital de Resolución de Conflictos a imponer la sanción, sin embargo su accionar se reduce a un informe previo que constituye un acto de simple administración, pero que de la investigación realizada se observó que en su mayoría es acogido por la autoridad competente. Asimismo, el término de tres (3) días para la contestación a los hechos imputados en el auto de llamamiento a sumario administrativo, determinado en el artículo 348 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, resulta insuficiente para la elaboración de una adecuada defensa del docente, considerando además que debe adjuntar las pruebas de descargo pertinentes, por consiguiente, el derecho a la defensa se encuentra en riesgo por la disposición legislativa de este término.

En sus conclusiones seis y nueve afirma que:

6. Los tiempos fijados tanto para la contestación al auto de llamamiento a sumario administrativo, término de prueba y convocatoria a audiencia, son demasiado cortos para garantizar una adecuada defensa, no existe armonía ni lógica normativa entre lo establecido en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Servicio Público, Ley Orgánica de Educación Intercultural y Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, esta falencia legislativa atenta contra el derecho a la seguridad jurídica... 9. El derecho a la defensa es otro de los derechos más afectados en los sumarios administrativos de docentes, este derecho va más allá del señalamiento de que nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, envuelve también los tiempos y medios adecuados para la defensa, la oportunidad e igualdad al ser escuchados, la posibilidad de argumentar, probar y contradecir y contar con asistencia profesional (2016, pg.67).

En este sentido, se confirma que los sumarios administrativos de docentes aplican parcialmente las garantías básicas del debido proceso, además de encontrarse supeditados al conocimiento de la normativa de los servidores públicos encargados de procesarlo.

(2014), DURAN P., NEYSIN, Universidad José Antonio Páez, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AL PERSONAL DOCENTE DE ACUERDO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO CASO: ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CARABOBO, Tesis para optar el grado de Magister, Venezuela.

Cuyo objetivo fue establecer la importancia de la investigación de los procedimientos administrativos sancionatorios al personal docente, el cual se encuentra enmarcado en los lineamientos nacionales, leyes, reglamentos, normativas, organizaciones, así como en la opinión de

especialistas destacados que coadyuvan para analizar el procedimiento administrativo sancionador al personal docente de acuerdo al ordenamiento jurídico venezolano; Zona Educativa del estado Carabobo. Llegando a la conclusión de que el ejercicio de dicha facultad constituye una de las más importantes manifestaciones del Poder Puniendo del Estado; la que tiene el objetivo de prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten u obstaculicen el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores de la administración pública. Asimismo, afirma que la potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de la eficiencia, moralidad, economía y transparencia entre otros, en este contexto el derecho disciplinario está conformado por todas las normas mediante el cual se exige a los funcionarios públicos determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones como lo menciona la Ley del Estatuto de la Función Pública y el reglamento del ejercicio de la profesión docente.

Por otro lado determina que si bien en el rango legal y constitucional se establece las modalidades de la responsabilidad, en la cual son susceptibles los funcionarios (civil, penal y administrativo) y los posibles efectos alternos que dependerá de la gravedad del ilícito ocasionado, es decir, un docente puede ser suspendido o inhabilitado o destituido del cargo público, en el cual el departamento que le corresponda indicará sanción a ejecutar dentro de sus facultades como lo establece la ley de Educación, el Reglamento del Ejercicio de la profesión docente y el Estatuto de la función pública.

Es la potestad disciplinaria la que corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia entre otros...exige a los funcionarios públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones como lo menciona la ley del Estatuto De La Función Pública y el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente...establece entre sus articulados las

causales por las cuales es posible aperturar un procedimiento disciplinario a un docente y llegar a la sanción de destitución cuando se ... las modalidades de la responsabilidad, en la cual son susceptibles los funcionarios (civil, penal y administrativa) y los posibles efectos alternos que dependerá de la gravedad de ilícito ocasionado... suspendido inhabilitado o destituido del cargo público... (2014, págs. 44-45).

(2013), ESCOBAR ESCAMILLA, W., Universidad de Costa Rica
RÉGIMEN DISCIPLINARIO DOCENTE APLICADO EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE, Tesis para optar el grado de Licenciatura, Costa Rica.

La investigación partió del objetivo de establecer mediante un análisis doctrinario y jurisprudencial, los aspectos normativos y procesales que conforman el régimen disciplinario docente en la educación pública costarricense. El tipo de investigación es bibliográfica, analizando los documentos doctrinales arribando a la conclusión de que las normas tipifican las faltas y sanciones, así como a los responsables de impartirla (Director, Dirección de recursos humanos, Ministro de educación con autorización del Tribunal de la Carrera del Docente y del Tribunal de Servicio Civil).

La investigación alerta de que existe una falta del Estatuto porque no especifica las faltas leves ni las faltas graves, sin embargo, si detalla la necesidad de respetar los principios del procedimiento administrativo y la determinación de la responsabilidad disciplinaria.

El Estatuto de Servicio Civil es claro en establecer la necesidad de observar los principios procesales elementales en todo proceso donde se procura imponer una sanción, ... el ejercicio del derecho de defensa, con todas las actuaciones que este implica.... cualquier violación a las disposiciones establecen el derecho de defensa es determinante de

responsabilidad para el infractor y de nulidad absoluta por intelección en las actuaciones procedimentales. De ahí colegimos que el derecho de defensa de los docentes del Ministerio de Educación en los procedimientos disciplinarios, está garantizado en la jurisprudencia constitucional y la normativa (2013, pg. 170).

Tesis nacionales

(2017), GARCÍA GONZALVEZ, J.R., Universidad Privada de Pucallpa, PRINCIPIOS DELIMITADOS DE LA POTESTAD SANCIONADORA Y SU APLICACIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN LA UGEL DE CORONEL PORTILLO 2016, Tesis para optar el título de abogado, Perú.

El objetivo de la investigación fue Determinar si los principios delimitadores de la potestad sancionadora impiden la aplicación de sanciones arbitrarias en los procesos disciplinarios contra los docentes de la UGEL de Coronel Portillo, es una investigación descriptivo correlacional, que recoge información con un cuestionario aplicado a docentes y abogados litigantes, quienes perciben en un 78% que los principios delimitadores de la potestad administrativa sancionadora no impiden que las sanciones impuestas sean arbitrarias, por razones de que en educación se basan en la Ley 29944 y no revisan la Ley 27444, asimismo, existe personal a quienes se les aplica la Ley servir, en este sentido no existe articulación entre las tres leyes que permitan reducir los procesos arbitrarios.

... en forma efectiva los principios de la potestad sancionadora establecidas en la ley 27444, no impiden la aplicación de sanciones arbitrarias en los procesos disciplinarios contra los docentes de la UGEL de CP en el año 2016... las normas y directivas que regulan el régimen disciplinario en el sector educación en la ley de la reforma magisterial, no se encuentran regulados en esta ley...(2017, pg.119).

(2014), URIOL RUBIO, J. F. Universidad Nacional de Trujillo, UTILIZACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y SU AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCEDIMIENTO, Tesis para optar el grado de Maestro, Perú.

El objetivo de la investigación fue determinar cómo se utilizan los medios probatorios en los procedimientos disciplinarios al personal del sector educación en La Libertad, periodo 2008-2009, en garantía a un debido procedimiento. Es una investigación descriptiva, concluyendo en la confirmación de que no se utiliza adecuadamente los medios probatorios en los procedimientos disciplinarios, no se respeta el principio de verdad material ni la correcta motivación de las resoluciones, por otro lado, las sanciones disciplinarias impuestas al profesorado y personal administrativo en el departamento de La Libertad en los años 2008 y 2009, en un porcentaje considerable, presentan vicios de nulidad, los procesos se limitan a las pruebas ofrecidas por las partes, pero no hay pruebas que la comisión aporte como producto de su investigación del caso. En suma, la investigación confirma el mal uso de los medios probatorios que afectan el debido procedimiento en los procesos sancionadores a docentes en la región La Libertad (2014, pg. 90).

(2014), VENTURA MANCCO, F., Universidad Nacional de Huancavelica EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO, A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CHURCAMP 2014, Tesis para optar el Título profesional, Perú.

Su propósito principal fue conocer los procesos disciplinarios administrativos entablados a los docentes de la Ugel de Churcampa, si se cumplen con los plazos establecidos, su población estuvo constituida por los docentes de la Ugel Churcampa y su muestra por 50 docentes a quienes se aplicó una encuesta mediante un cuestionario, concluyendo

que en el 94,7% de los casos, afirman que el cumplimiento de los plazos establecidos en el procedimiento disciplinario administrativo no es el adecuado, privándolos del derecho de defensa. Asimismo, el 63,2% de los casos en estudio ha existido la notificación al interesado acerca de la apertura del proceso administrativo disciplinario, así como el 36,8% de los casos no se les proporcionó los cargos de las denuncias que los responsabilizan, estos resultados nos confirman faltas al debido procedimiento, los cuales sumado al no cumplimiento de los plazos establecidos en el proceso sancionador, evidencian vulneración a los derechos de los procesados (2014, pg. 86).

2.2. BASES TEÓRICAS

El Debido proceso

Al respecto la Corte Interamericana de derechos Humanos, sostiene que “... el debido proceso comprende todas las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial” (1999, parr. 118). Por lo expuesto, el Ministerio de Justicia del Perú (2013) aclara que el debido proceso garantiza el respeto de los derechos fundamentales de la persona en cualquier proceso que se vea implicado.

De la misma forma, Sagüés (1993) ratifica la existencia de dos caras del debido proceso: adjetivo y sustantivo que deben cumplirse en el proceso administrativo:

“... el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertas formalidades de trámite y procedimiento que deben observarse para la emisión de una sentencia; mientras que el debido proceso sustantivo garantiza que las sentencias sean razonables” (Elementos de Derecho Constitucional, pg. 328)

En este contexto, el Tribunal Constitucional sostiene que el debido

proceso presenta dos expresiones: una formal que comprende los principios y reglas relacionados con las formalidades aplicables a todo proceso judicial, tales como el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa y la motivación. Y, en segundo lugar, la expresión sustantiva relacionada con los estándares de razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe cumplir.

En otras palabras, el debido proceso se constituye un principio – derecho, aclarando, que es un principio que limita y regula los poderes del Estado, previendo que las autoridades actúen arbitrariamente, en el sentido de garantizar el derecho de todas las personas; también un derecho a quienes les asiste para el ejercicio pleno de sus facultades en su proceso de defensa, frente a incertidumbres o denuncias que puedan enfrentar.

El debido proceso en los procedimientos administrativos

Recordando que el debido proceso garantiza el respeto de los derechos fundamentales de la persona, también se extiende al derecho administrativo y sus procedimientos, como lo explicita el Ministerio de Justicia (2013) en su guía del debido proceso:

El fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que, si ésta resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional. (Minjus, Pg. 13)

Dando fe, de esta forma que el debido proceso En tal supuesto, cuando el debido proceso se aplica al procedimiento administrativo se

hace referencia al debido procedimiento administrativo.

Garantías del debido procedimiento administrativo

Derecho a la notificación, garantiza que los administrados sean informados oportunamente de los procedimientos, las diligencias o decisiones tomados por la administración pública, mediante medios idóneos que permitan dar fe su ejecución, así como del contexto en el que fue realizado.

El Tribunal Constitucional sostiene que la observancia del derecho de notificación es trascendental en todo proceso administrativo disciplinario, como se trasluce en los fundamentos jurídicos de la sentencia con Exediente Nro. 1109 de fecha 16-04-2002 "...solo la notificación oportuna al administrado de los cargos que se le imputan permitirá el ejercicio adecuado de su derecho de defensa..." (2002, Fundamento jurídico 13).

Derecho de acceso al expediente, tiene la finalidad de facilitar la información necesaria para ejercer el derecho de defensa. Asegura que los administrados y/o sus abogados puedan dar lectura e informarse debidamente sobre todos los actuados, para asumir este derecho puede solicitarse verbalmente y se concede de inmediato en la oficina donde esté ubicado el expediente, sin ser necesario una resolución expresa.

La única excepción a este derecho está constituida por los documentos cuya información afecten el derecho a la intimidad personal y/o familiar, las que expresamente son excluidos por ley o por seguridad nacional.

Este derecho está garantizado por la Ley del procedimiento Administrativo General:

“... Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente previstas por ley...” (Ley No 27444, Art. 160).

Derecho a la defensa, este derecho involucra la facultad, del administrado, de argumentar y sustentar su defensa, para ello, debe contar con un plazo razonable que le permita ejercerlo debidamente, es decir, la facultad de contar con el tiempo y los medios necesarios para preparar su defensa en forma adecuada. De esto se deduce que el derecho a la defensa, garantiza que toda persona procesada, tenga la oportunidad de contradecir a la autoridad, para defender sus derechos e intereses.

Al respecto, el Ministerio de Justicia, resalta que la Corte Interamericana de derechos detalla “...que la oralidad podría constituir un elemento esencial del derecho de defensa en ciertos tipos de procedimientos...” (Minjus, pg. 19). Con lo mencionado se esclarece que la finalidad es brindar todas las garantías para que el procesado este facultado para su defensa.

Derecho a ofrecer y producir pruebas, derecho contenido en la Ley de Procedimiento Administrativo General, en el Artículo IV, numeral 1.2 y consiste en que el administrado está facultado para presentar pruebas de descargo que sustenten sus argumentos. De la misma forma, el derecho exige que la autoridad admita las pruebas, las valore y las considere para emitir una decisión en el procedimiento administrativo.

Es un derecho trascendental, debido a que la producción y valoración de pruebas está vinculada a la motivación de las decisiones que deba tomar la autoridad y al resultado final del procedimiento administrativo.

Derecho a una decisión motivada y fundada en derecho, de acuerdo al tribunal constitucional este derecho garantiza que la autoridad proceda con razonabilidad y coherencia entre lo que se pide y lo resuelto (motivación), no con arbitrariedad en sus decisiones administrativas, las que debe plasmar en las resoluciones, de la misma forma, la apreciación debe fundarse en razones de hecho y derecho, como lo confirma en la sentencia (2006) con expediente No 8495

... un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando solo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no solo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada... (Exp. 8495, Fundamento jurídico 40).

Este derecho está garantizado en la Ley de procedimiento Administrativo general en su numeral cuatro, en sus artículos 3 y 6, confirmando que todo acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Derecho a la presunción de licitud, la Constitución Política del Perú en su artículo 2 establece que "...toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad..." (1993, literal e). En este sentido, la Ley 27444 recoge este derecho fundamental como derecho a la presunción de licitud, en su Numeral 9 del Artículo 230, deduciéndose de ello que se presume que toda persona cumple con sus deberes, en este sentido es la autoridad quien debe realizar las investigaciones pertinentes para probar lo contrario.

Derecho al plazo razonable, este derecho fundamental garantiza que los procesos se desarrollen sin demora, en los tiempos prudentes y establecidos por ley, con ello se impide que los procesados permanezcan largo tiempo sin certeza sobre la determinación de sus derechos y obligaciones, generando una inseguridad jurídica.

Según Landa (2013): "...el carácter "razonable" de la duración de un procedimiento administrativo debe apreciarse considerando las circunstancias de la causa, la complejidad del asunto, la conducta de los reclamantes y de las autoridades, así como las consecuencias de la demora...", las que deben establecerse por ley.

Sin embargo, el incumplimiento del plazo fijado por ley no genera como efecto la invalidez de las resoluciones.

Derecho a ser investigado por una autoridad competente, según lo citado por Dromi (1998) competencia se entiende como:

...el conjunto de facultades y obligaciones que un órgano puede y debe ejercer legítimamente. La competencia es irrenunciable e improrrogable y debe ser ejercida directa y exclusivamente por el órgano que la tiene atribuida, salvo los casos de delegación, sustitución o avocación... "(1998, pg. 241).

Más aún, la Ley 27444 en su numeral 1, artículo No 230 señala que sólo por ley se puede atribuir la potestad sancionadora.

En este punto, el Artículo 80 de la misma ley establece que las autoridades se encuentran obligadas a apreciar de oficio su competencia para iniciar, proseguir un procedimiento administrativo, considerando los criterios aplicables al caso de materia, territorio, grado o cuantía). En este contexto se previene y garantiza que la competencia de la autoridad esté previamente establecida por ley, que es imprescindible para que sus actuaciones sean válidas.

Derecho a ser investigado por una autoridad imparcial, a través de este derecho se garantiza que las autoridades no guarden ningún interés personal en los resultados, ni en los prejuicios sobre la actitud de las partes, incluso fortalece el derecho de recusación a las autoridades si el procesado lo cree conveniente.

Con lo expuesto anteriormente, el derecho a una autoridad imparcial garantiza que durante el desarrollo del proceso exista una posición objetiva al momento de resolverlo.

“... la garantía de la imparcialidad implica que las autoridades que conozcan cualquier clase de procedimiento no tengan opiniones anticipadas sobre la forma en la que resolverían, compromisos con alguna de las partes...” (Minjus, pg. 25).

Derecho a impugnar las decisiones administrativas, consiste en la facultad de poder cuestionar una decisión administrativa a través de los mecanismos previstos en el procedimiento administrativo, en el supuesto de que no se hayan considerado medios impugnatorios, dentro del procedimiento administrativo o se hayan agotado, este derecho permite recurrir a una de dos instancias: la vía judicial con el fin de cuestionar la decisión de la Administración Pública mediante un proceso contencioso-administrativo, de lo contrario, si, se vulneran derechos fundamentales con un proceso de amparo.

Cabe precisar que el ejercicio de este derecho no puede ser condicionado por pagos o por falta de respuesta a los recursos interpuestos.

Ne bis in ídem, establecido desde la Constitución Política del Perú en su numeral 2, artículo 139, consiste en el derecho a no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho, se desprende del derecho al debido proceso

(cosa juzgada),

El Tribunal Constitucional citado por el Minjus (2013) refiere que la potestad sancionadora del Estado tiene una configuración material, que implica que no se debe imponer dos sanciones por un mismo hecho a una persona, asimismo, una configuración procesal en la que nadie debe ser juzgado dos veces por un mismo hecho, aclarando que no puede haber dos procesos distintos con el mismo objeto (2013, pg. 27).

Principio de publicidad de normas procedimentales, la Constitución Política del Perú prescribe que "... toda ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial..." (1993, Art. 93), en este contexto, el administrado está obligado a cumplir toda ley, que haya sido publicada, resultando inválido sancionar a una persona por incumplimiento de una norma no publicada.

Los derechos fundamentales como base del debido proceso

Según Romero, J. (2016, pg. 85):

"...los derechos fundamentales son valiosos en la medida en que cuentan con garantías que permiten accionarlos, no sólo ante los tribunales, sino también ante la administración...la tutela de éstos derechos conduce...a dos cosas: primero, que se garantice el derecho al debido proceso material y formal de los ciudadanos y, segundo, que el estado asegure la tutela jurisdiccional" (Universidad de Trujillo, 2016).

En este contexto, la facultad de resolver controversias en la administración, requiere de ética para actuar con probidad e idoneidad y al mismo tiempo, buscar que la aplicación de los procedimientos garantice el respeto a los derechos fundamentales de la persona implicada.

El jurista Landa, C. (2012) consideraba por ello que el debido

proceso se dividía en dos vertientes: el debido proceso formal o adjetivo que se evidencia en el trámite, el procedimiento utilizado para dictar una sentencia, las garantías respetadas que aseguren el derecho de defensa del procesado y el debido proceso sustantivo o material, el cual protege a las partes frente a las leyes y actos arbitrarios impuestos por la autoridad.

Lo sustentado hasta aquí, permite identificar los derechos que integran el debido proceso como:

Derecho de defensa, reconocido en el Art. 139, inciso 14 de la Constitución Política del Perú, que asegura en el procesado, la facultad de brindar descargos, a contar con un abogado que lo ayude en su defensa.

Derecho a la prueba, establecido en el Art. 139, inciso 3 de la Constitución, que permite a la persona involucrada de adjuntar medios probatorios que demuestren a la autoridad la veracidad de sus argumentos de defensa, lo cual no impide que la autoridad solicite medios de prueba en caso se le presente como imposibilidad a la persona procesada.

Función Disciplinaria en la Ley 29944

La función sancionadora disciplinaria es la facultad que permite ejercer control sobre el servidor que incumple sus funciones, según Bolaños (2006) es:

“... el concepto de poder disciplinario explica la autoridad de un patrono – en este caso, el Estado- para sancionar las conductas u omisiones de sus servidores que infrinjan los deberes, responsabilidades y prohibiciones a que estos se encuentran sujetos, poder que irremediamente a ejercerse observando en un todo el procedimiento especialmente establecido a éstos efectos...” (Derecho disciplinario

policial, Pg. 75)

El régimen disciplinario en la Carrera Pública Magisterial se encuentra regulado por la Ley de la reforma Magisterial, Ley No 29944 (LRM) y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 004-2013 ED (Reglamento de la LRM).

En la LRM, en concordancia con los artículos 80.2 y 81.2 del Reglamento de la LRM, se le "... otorga potestad sancionadora disciplinaria al director o directora de la institución educativa sobre el profesor o profesora que ejerce labor en aula, personal jerárquico y subdirector o subdirectora de la misma..." (LRM, Art. 46-47). En razón de considerarse a la institución educativa como la primera y principal instancia del sistema educativo descentralizado, en el cual el director o directora es la máxima autoridad y responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo, por lo que resulta imprescindible que cuente con todas las facultades necesarias para desarrollar sus funciones.

Las sanciones que pueden imponer los directivos son: amonestación escrita, suspensión del cargo hasta por 30 días sin goce de remuneraciones.

Faltas administrativas disciplinarias que los directores pueden sancionar son las Faltas leves y las que no pueden calificarse como leves conforme al artículo 80 de la LRM, el director puede sancionar todas las faltas leves o faltas que no pueden ser calificadas como leves.

1. El incumplimiento del cronograma establecido para el desarrollo del programa curricular.
2. El incumplimiento de la jornada laboral en la que se desempeña el profesor, sin perjuicio del descuento remunerativo correspondiente.
3. La tardanza o inasistencia injustificada, sin perjuicio del descuento remunerativo correspondiente.

4. La inasistencia injustificada a las actividades de formación en servicio para las que ha sido seleccionado por su institución educativa, red educativa, el Gobierno Regional o el Minedu.
5. La evasión de su obligación, de ser el caso, de colaborar en las evaluaciones de rendimiento de los estudiantes que realiza el Minedu, de participar en la formulación, ejecución y seguimiento al proyecto educativo institucional, proyecto curricular de la institución educativa, reglamento interno y plan anual de trabajo de la institución educativa.

Es oportuno indicar que el director/a de la institución educativa, puede sancionar las inasistencias injustificadas al centro de trabajo hasta por tres (03) días consecutivos o cinco (05) discontinuos, en un periodo de dos (02) meses.

En caso de faltas graves

Las faltas graves o muy graves están establecidas en el artículo 48 de la LRM, las que el director debe poner en conocimiento de la UGEL o DRE y están constituidas por: Causar perjuicio al estudiante y/o a la institución educativa, ejecutar, promover o encubrir, dentro o fuera de la institución educativa, actos de violencia física, de calumnia, injuria o difamación, en agravio de cualquier miembro de la comunidad educativa, realizar actividades comerciales o lucrativas, en beneficio propio o de terceros, aprovechando el cargo o la función que se tiene dentro de la institución educativa, con excepción de las actividades que tengan objetivos académicos, realizar en su centro de trabajo actividades ajenas al cumplimiento de sus funciones de profesor o directivo, sin la correspondiente autorización, abandonar el cargo injustificadamente, interrumpir u oponerse deliberadamente al normal desarrollo del servicio educativo, realizar en su centro de trabajo actividades de proselitismo político partidario en favor de partidos políticos, movimientos, alianzas o

dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales, otras que se establecen en las disposiciones legales pertinentes.

Faltas muy graves, que considera el no presentarse a la evaluación de desempeño docente sin causa justificada, haber sido condenado por delito doloso, haber sido condenado por delito contra la libertad sexual, apología del terrorismo o delito de terrorismo y sus formas agravadas, incurrir en actos de violencia o causar grave perjuicio contra los derechos fundamentales de los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa y/o institución educativa, así como impedir el normal funcionamiento de los servicios públicos, maltratar física o psicológicamente al estudiante causando daño grave.

Calificación y gravedad de la falta

Según el artículo 78 del reglamento de la LRM, en la cual se prescribe los criterios de evaluación de las faltas cometidas por los administrados: circunstancias en que se cometen, forma en que se cometen, concurrencia de varias faltas o infracciones, participación de uno o más servidores, gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido, perjuicio económico causado, beneficio ilegalmente obtenido, existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor, situación jerárquica del autor o autores.

Procedimientos de investigación y aplicación de sanciones

El Reglamento de la LRM, en su artículo 88.2, especifica que el director de la institución educativa alcanzará al denunciado una copia de la denuncia para que el procesado, haciendo uso de sus derechos pueda evaluar si presenta o no sus descargos (Presunción de inocencia), en un plazo improrrogable de diez días hábiles, contabilizados a partir de la notificación, vencido el plazo, se tiene un plazo no mayor a diez días para la investigación debida, seguidamente se aplica la amonestación escrita o suspensión a través de una resolución, la cual debe ser notificada a la

UGEL, para su registro correspondiente y ejecución de sanción.

Cabe recordar que el artículo 44 de la LRM, establece las medidas preventivas que deben aplicarse de oficio, sin necesidad de solicitud del denunciante mediante una resolución directoral que mencione el fundamento de hecho y derecho del procedimiento, la que debe notificarse a la UGEL, en los casos de denuncias judiciales o administrativas por: presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, presunto hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, presuntos delitos de apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, presuntos delitos de corrupción de funcionarios, presuntos delitos de tráfico ilícito de drogas.

Incurrir en actos de violencia que atenten contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio, que impiden el normal funcionamiento de los servicios públicos.

En casos de maltrato físico o psicológico contra estudiantes se prevé el retiro del docente, de la institución educativa, correspondiendo esta decisión al director de UGEL o DRE, previa recomendación de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes.

Los recursos administrativos, están constituidos por los medios administrativos de impugnación, en el caso de que no se esté de acuerdo con las sanciones impuestas por el director, la LRM establece:

El recurso de reconsideración, con plazo de presentación de 15 días hábiles, luego de notificada la Resolución Directoral de sanción. Se presenta ante el mismo director y requiere de la presentación de prueba nueva, sino será declarado improcedente, de lo contrario se evalúa las nuevas pruebas para declarar fundada o infundada, según sea el caso.

El recurso de apelación, también es presentado ante el director de la institución educativa, en un plazo de 15 días hábiles luego de notificada la

Resolución Directoral de sanción, el cual es remitido al Tribunal del servicio Civil conjuntamente con los antecedentes que sustentaron la emisión de acto impugnado, en un plazo de diez días hábiles, luego de su presentación y previa verificación de que el imputado consigne sus datos personales y la firma de su abogado, en caso falte algún dato, se le solicita la subsanación debida en un plazo de dos días hábiles.

2.3. DEFINICIONES CONCEPTUALES

Debido proceso

Para comprender lo que significa el debido proceso es preciso recurrir a la bibliografía jurídica:

“El debido proceso es el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo, una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho...” (Sanín, 1993, pg.6).

Según Suárez, el debido proceso tiene dos acepciones, la primera es formal, se refiere a los actos y formalidades legales cumplidos por el funcionario competente, en la oportunidad y el lugar debidos, la segunda es material, que consiste en el adelantamiento de las etapas del proceso y el cumplimiento de las distintas actuaciones judiciales, con sujeción a las garantías constitucionales y legales.

Debido procedimiento

El derecho a un debido procedimiento administrativo es recogido en la Ley N° 27444, y responde, al desarrollo doctrinario del derecho a un debido proceso judicial, el cual, es esencial en el ejercicio de la función jurisdiccional, y está consagrado como un derecho constitucional.

El debido procedimiento administrativo queda configurado, primero,

como el expreso soporte constitucional de los diversos principios que ordenan el procedimiento administrativo; segundo, como un derecho exigible de manera directa a la Administración; tercero, como un instrumento que fortalece el carácter garantista del procedimiento regulado; y cuarto, como una herramienta pedagógica y de ordenación conceptual (2007, Jiménez, pg.9)

Función sancionadora disciplinaria

La falta disciplinaria es definida según Alcocer es:

... toda conducta activa u omisiva, voluntaria o no, mediante el cual el profesor contraviene los principios, deberes y prohibiciones establecidos en la Ley de Reforma Magisterial y en la Ley del Código de Ética de la Función Pública... (2016, pg. 22).

Elementos de una falta disciplinaria

Para que se configure una falta disciplinaria y la autoridad educativa pueda desplegar su potestad, debe contar con cuatro elementos: acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad.

Acción, es la acción u omisión del trabajador educativo, quien actúa voluntariamente para producir un cambio en la realidad externa.

Tipicidad, es la adecuación, o encaje (juicio de subsunción) del acto humano ejecutado por el sujeto a la figura descrita por ley como falta disciplinaria.

Antijuricidad, es el incumplimiento a una función (deber), no es el desconocimiento formal del deber funcional lo que origina la falta disciplinaria, sino que es la infracción sustancial de dicho deber lo que origina la falta, por atentar contra el buen funcionamiento del Estado y por

ende contra sus fines, lo que se encuentra al origen de la antijuridicidad de la conducta.

De esta forma, no es posible tipificar faltas disciplinarias que remitan a conductas que cuestionan la actuación del profesor haciendo abstracción de los deberes funcionales que le incumben; así mismo, tampoco es posible consagrar cláusulas de responsabilidad disciplinaria que permitan la imputación de faltas desprovistas del contenido sustancial de toda falta disciplinaria.

Culpabilidad, es la reprochabilidad de la conducta de una persona imputable y responsable, que pudiendo haberse conducido de una manera correcta no lo hizo, que permite al instructor del proceso disciplinario declarar responsable al profesor por la comisión de la falta y merecedor de una sanción disciplinaria.

De esta forma, cuando estamos frente a un caso de tipificación indirecta, para sancionar a un profesor los órganos correspondientes (DRE o UGEL) deberán realizar lo siguiente:

- a) Determinar la norma primaria, esto es, el deber que está obligado a cumplir durante el desempeño de sus funciones;
- b) Verificar el incumplimiento de la norma primaria; y
- c) Determinar la configuración de la norma secundaria, por el incumplimiento de la norma primaria, esto es, la comisión de la falta disciplinaria (2016, pg. 31).

Apertura de una investigación

Toda investigación de la denuncia por parte de la autoridad educativa se desarrolla en las siguientes etapas:

Primera etapa: denuncia y apertura de la investigación, con la denuncia (que puede ser realizada por un profesor, padre de familia o un

tercero) sobre la comisión de una falta disciplinaria (notitia disciplinare culpa), o disposición de una autoridad educativa superior y con la inmediata apertura de la investigación.

No existe formalidad exacta en la formulación de la denuncia, puede ser presentada por vía escrita o –incluso– verbal. En el caso de la denuncia verbal, ésta se realiza de manera presencial ante el Jefe de Personal, emitiéndose un Acta que contendrá la información que la sustenta, así como la copia del DNI del denunciante y los medios probatorios presentados en la denuncia.

Ahora bien, a fin de dotar de formalidad a la apertura de la investigación, es recomendable que el Titular de la instancia de gestión educativa descentralizada emita una Resolución Directoral con tal fin.

Segunda etapa: Instrucción de la investigación, comprende la notificación de la denuncia al docente para que pueda ejercer su derecho de defensa y realizar su descargo, posteriormente la investigación.

Al terminar la investigación en los plazos previstos se pasa a la tercera etapa: emisión de resolución, al término del plazo de investigación, de veinte (20) días hábiles para el caso de la amonestación escrita, o de veinticinco (25) días hábiles para el caso de la suspensión en el cargo, el Jefe de Personal tiene el deber de culminar la investigación y emitir su Informe Investigatorio.

Cuando el Informe Investigatorio determine que no hay comisión de la falta disciplinaria, el Jefe de Personal recomendará el archivo de la investigación.

Por otro lado, cuando en el Informe Investigatorio el Jefe de Personal recomienda la aplicación de la sanción de amonestación escrita o suspensión, será el Titular de la instancia de gestión educativa descentralizada quien emitirá la Resolución de sanción correspondiente.

Cuarta etapa: determinación de la sanción y emisión de la resolución, recibido el Informe Investigatorio del Jefe de Personal, cuando recomiende la sanción de amonestación escrita, el Titular de la instancia de gestión educativa descentralizada emitirá la Resolución de amonestación correspondiente.

Por otro lado, cuando el Informe Investigatorio del Jefe de Personal, recomienda la sanción de suspensión, corresponde al Titular de la instancia de gestión educativa descentralizada la graduación de la sanción y emitir la resolución en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de recibido el Informe.

Cuando la investigación versó sobre profesores que laboran en el Ministerio de Educación, la Resolución de sanción la emite el Jefe inmediato superior.

2.4. HIPÓTESIS

Como hipótesis general se tiene: La aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental incide positivamente en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la Ugel Chupaca, 2019.

Como hipótesis específicas se desglosan los siguientes:

a) La observancia al debido proceso incide positivamente en la previsión las consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado, según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

b) El cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional incide positivamente en el tipo de conductas sancionadoras administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

c) El reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos, incide positivamente en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

2.5. VARIABLES

2.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE

Variable dependiente: Función disciplinaria según Ley 29944 cuya definición operacional de estudio es: la facultad por la cual la autoridad sanciona a los trabajadores cuando incumplen sus funciones.

2.5.2. VARIABLE INDEPENDIENTE

Variable independiente: El debido proceso, cuya definición operacional de estudio es: el derecho por el cual en todo proceso administrativo se respetan todos los derechos humanos del procesado.

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Para el trabajo de investigación es necesario contar con la definición operacional de cada variable, en este sentido, luego de una revisión bibliográfica se establecieron las siguientes definiciones para cada variable.

Variable independiente: El debido proceso, que es definida operacionalmente como las condiciones que aseguran que la persona ejerza todos sus derechos durante su defensa en un proceso.

Variable dependiente: Función disciplinaria según la Ley 29944, definido operacionalmente como la facultad del superior jerárquico para sancionar al trabajador frente al incumplimiento de sus funciones, mediante un procedimiento establecido.

Tabla 1

Operacionalización de variables

VARIABLES	DIMENSIÓN	INDICADORES	ÍTEMS	ESCALA
El debido proceso.	Grado de observancia al debido proceso.	Cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional	12	Si
		Nivel de actuación dentro de las facultades atribuidas en la ley.		No
	Cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional.	Nivel de reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos		
	Reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos	Nivel de sometimiento a lo que la ley establece. Nivel de atribución de facultades de actuación.		
Función disciplinaria según la Ley 29944	Nivel de atribución de la Potestad sancionadora establecida en la ley.	Nivel de previsión de las consecuencias administrativas	6	
		Nivel de especificación de las disposiciones dirigidas a identificar conductas o identificar sanciones.		
	Tipos de conductas sancionables administrativamente previstos en la ley.	Nivel de las infracciones administrativas, no permiten interpretación extensiva o analogías		
	Correcta atribución de la potestad sancionadora establecida en la ley.	Nivel de la sanción administrativa a los responsables de acuerdo a Ley.		

Fuente: Chaca, E., 2019

CAPÍTULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación del presente estudio es sustantiva porque el estudio se centró en realizar una revisión teórica del principio del debido proceso para explicar si los derechos fundamentales que engloba son respetados durante la aplicación de la función disciplinaria según Ley 29944, en los docentes procesados Ugel Chupaca, 2019.

3.1.1. ENFOQUE

El enfoque se refiere al proceso sistemático, disciplinado y controlado que se sigue durante la investigación que se evidencia en la metodología utilizada, en este sentido el presente trabajo tiene un enfoque mixto debido a que como menciona Baptista:

“Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación”, pero al mismo tiempo. “Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento” (2006, pg.321).

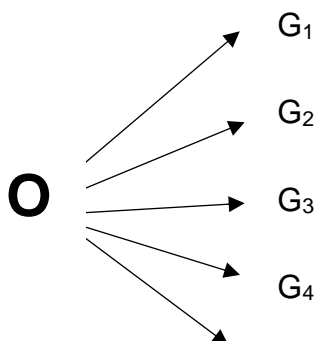
3.1.2. ALCANCE O NIVEL

La investigación es explicativa porque, estudia dos variables, el principio del debido proceso y la función sancionadora según Ley 29944, buscando explicar la relación entre ambas.

3.1.3. DISEÑO

El tipo de investigación del presente estudio pertenece al no experimental, en este caso al descriptivo transversal, porque permitió realizar una descripción de los procedimientos seguidos en cada caso de

sanción disciplinaria de la muestra en un lapso de tiempo que corresponde al año 2019.



Donde:

O : Observación

G1 : Expediente 1

G2 : Expediente 2

G3 : Expediente 3

G4n : Expediente 12

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

La población estuvo constituida por la totalidad de casos disciplinarios a docentes con sanción firme con Resolución Directoral en el año 2019, como año de culminación del proceso administrativo, determinándose la muestra con las sanciones disciplinarias, cuyos procesados han judicializado sus casos por motivos de vulneración de sus derechos fundamentales que son 12, por ello trabajaremos con todos los expedientes de los casos.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

3.3.1. PARA LA RECOLECCION DE DATOS

Para la recolección de datos, se utilizó la técnica del fichaje mediante la aplicación del instrumento de la ficha bibliográfica, con la que se registraron los datos de los libros consultados y la ficha textual, con la que se registraron las afirmaciones o explicaciones de los diferentes autores.

Asimismo, la técnica de la observación me sirvió para revisar los expedientes a través del instrumento de la ficha de observación de expedientes, el cual fue elaborado con preguntas cerradas de opción doble, que me sirvió para recoger información relevante en base a las variables.

3.3.2. PARA LA PRESENTACIÓN DE DATOS

Para la presentación de datos, se utilizaron los cuadros y gráficos son arreglos sistemáticos, ordenados de datos numéricos las que son presentadas por medio de una tabla, formada por columnas y filas, según ciertos criterios y donde se destacan los aspectos principales de los datos para facilitar la descripción, lectura e interpretación de los hechos estudiados.

Por otro lado, en el presente estudio se utilizaron tablas de doble entrada para la presentación de datos y para facilitar el análisis de los mismos se utilizaron los diagramas tipo tortas.

3.3.3. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

Para el análisis de los datos recogidos se utilizó la asistencia de la computadora y programas como: Excel y SPS, que sirvieron para verificar si los resultados comprueban o no la investigación realizada.

CAPÍTULO IV:

RESULTADOS

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS

Con respecto a la variable uno, sobre el debido proceso se cuenta con los resultados que se muestran en la ilustración uno.

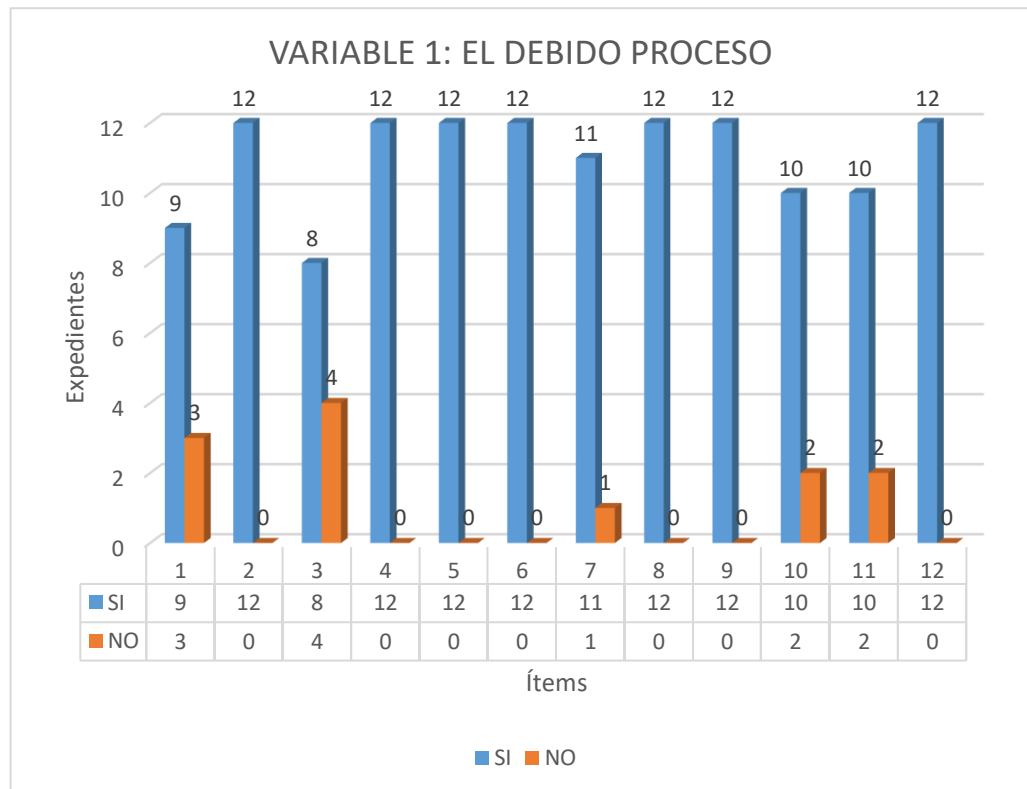


Ilustración 1:

Resultados de ficha de análisis de documentos (Chaca, E.,2019)

Con respecto al grado de observancia al debido proceso se tienen las siguientes estadísticas, en base al análisis de los expedientes revisados, detallando en cantidad de respuestas que fueron si y las que fueron no, así como sus porcentajes tomando en cuenta de que fueron doce expedientes analizados.

Las barras azules muestran las respuestas afirmativas y las barras rojas las respuestas negativas.

Tabla 2:

Tabulación de observación al debido proceso.

PREGUNTAS	ALTERNATIVAS				TOTAL	
	SI		NO			
	No	%		%	No	%
7.En la aplicación de la sanción ¿Las autoridades o directivos de la Ugel Chupaca se respetaron las garantías constitucionales?	9	75	3	25	12	100
8.El expediente evidencia que la autoridad quien inicia la investigación notifica oportunamente al procesado	12	100	0	0	12	100
9.¿El expediente evidencia que se cumplieron los plazos correspondientes en cada procedimiento, establecidos según norma (Descargo, investigación)?	8	67	4	33	12	100
10.En el expediente se evidencia que el procesado tuvo acceso a las copias de lo actuado oportunamente para ejercer su defensa.	12	100	0	0	12	100
11.El expediente evidencia que los medios probatorios alcanzados por el procesado en su descargo fueron considerados en la investigación	12	100	0	0	12	100
12.En el expediente ¿La resolución de sanción explica el motivo de sanción y las razones que la sustentan?	12	100	0	0	12	100
13.En el expediente ¿Las acciones respetan el principio Ne bis in ídem (No ser enjuiciado ni sancionado dos veces por la misma falta)?	11	92	1	8	12	100

Fuente: Ficha de observación de expedientes aplicada a muestra de UGEL Chupaca, (2019).

Interpretando los resultados de la tabla, se puede afirmar:

Con respecto al ítem 1 tenemos 9 expedientes revisados evidencian el respeto a los derechos constitucionales, haciendo un 75% y solamente

3 expedientes no lo evidencian, haciendo un 25%, evidenciándose mayor rigor en el caso de docentes contratados, así como mayor rigor en varones que en mujeres, lo que podría considerarse como vulneración al derecho a la igualdad ante la ley.

Con respecto al ítem 2, tenemos 12 expedientes revisados evidencian las notificaciones del inicio del proceso que realiza al procesado, la autoridad pertinente, haciendo un 100%. En tal sentido podemos evidenciar que se respeta el derecho constitucional a la defensa del procesado, quien al conocer el inicio del proceso puede preparar su defensa, realizar su descargo en el tiempo prudente.

Con respecto al ítem 3, tenemos 8 expedientes que hacen un 67% evidencian que se cumplieron los plazos establecidos para cada proceso (investigación, descargos, entre otros), asimismo, hay 4 expedientes que hacen un 33% que evidencian que no se cumplieron los plazos debido a que los procesados entregaron antes del tiempo sus descargos y/o pidieron contar con más tiempo para la misma acción.

Con respecto al ítem 4, tenemos que los 12 expedientes revisados, que hacen el 100%, cuentan con las notificaciones oportunas al procesado, garantizando su derecho de defensa. Eso demuestra que con respecto a este ítem se logró respetar los derechos del procesado.

Con respecto al ítem 5, tenemos que en los 12 expedientes que hacen el 100%, se tuvo en cuenta los elementos que el procesado alcanzó como medio de prueba.

Con respecto al ítem 6, en los 12 expedientes revisados que hacen el 100%, se verifica que las resoluciones mencionan el motivo de sanción y las razones que la sustentan. Es importante que se cumpla con este requisito con el fin de que se argumenten las posibles sanciones o los casos en los cuales no se determine responsabilidad del procesado, esto ayuda para que los administrados puedan dar cuenta de sus

responsabilidades enmarcados en la ley.

Con respecto al ítem 7, se evidencia que 11 expedientes que hacen el 98%, en sus actuados respetan el principio *Ne bis in ídem* (No ser enjuiciado ni sancionado dos veces por la misma falta), sin embargo, un expediente que hace el 8% no lo evidencia, ya que fue sancionado por su jefe inmediato, que como docente fue su director y posteriormente también fue sancionada por la comisión disciplinaria de la Ugel Chupaca, razón por la que hasta hoy, el proceso sigue judicializado.

En cuanto a la dimensión de cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional, se tienen los siguientes resultados de la tabla.

Tabla 3:

Tabulación de resultados de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional.

PREGUNTAS	ALTERNATIVAS				TOTAL	
	SI		NO			
	No	%	No	%	No	%
En el expediente ¿La investigación considera y brinda al procesado derecho a declarar sus argumentos?	12	100	0	0	12	100
En el expediente ¿Se consigna el derecho al procesado a brindar pruebas?	12	100	0	0	12	100
En el expediente ¿La resolución de sanción consigna gradualidad entre la falta y la sanción?	10	83	2	17	12	100

Fuente: Ficha de observación de expedientes aplicada a muestra de UGEL Chupaca, (2019).

Interpretación

Con respecto al ítem 8, tenemos 12 expedientes revisados. Que

hacen el 100%, las que evidencian que se brindó al procesado la oportunidad para argumentar y/o aclarar su posición.

Con respecto al ítem 9, tenemos que, en los 12 expedientes revisados, que hacen el 100% se brinda al procesado la facultad de ejercer su derecho a rendir pruebas.

Con respecto al ítem 10, tenemos que 10 expedientes, que hacen el 83%, evidencian en su resolución de sanción gradualidad entre la falta y la sanción, así como en 2 expedientes, que hacen el 17% no se evidencia dicha gradualidad, una por contar con sanción del jefe inmediato superior y por la comisión disciplinaria de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chupaca y en el otro caso por tener una sanción más benigna con respecto a la falta, con lo cual se evidencia que no hubo un adecuado equilibrio entre la falta y la sanción.

Por otro lado, en cuanto a la dimensión reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos, aquí se tiene los siguientes resultados en base a la ficha de análisis de documentos.

Tabla 4:

Tabulación de resultados del reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos.

PREGUNTAS	ALTERNATIVAS				TOTAL	
	SI		NO			
	No	%	No	%	No	%
¿Se cumple con la absolución de Recursos impugnatorios presentados por los Docentes sancionados de la UGEL Chupaca dentro del plazo legal?	10	83	2	17	12	100
¿Cumple en su oportunidad, el titular de la UGEL Chupaca, emitir el Acto Resolución de sanción?.	12	100	0	0	12	100

Fuente: Ficha de observación de expedientes aplicada a muestra de UGEL Chupaca, (2019).

Interpretación

Con respecto al ítem 11 tenemos 10 expedientes revisados, que hacen un 83%, en la que se evidencia la absolución de los recursos impugnatorios presentados por los docentes impugnatorios, en los plazos predispuestos, en cuanto a los 2 expedientes restantes que hacen el 17% no se cumple debido a que no hubo impugnaciones.

Con respecto al ítem 12, en los 12 expedientes, que hacen el 100%, se evidencia que el titular de la Ugel Chupaca emite oportunamente el acto resolutivo de sanción.

Con respecto a la variable dos que se refiere a la Función disciplinaria según la Ley 29944, los resultados estadísticos se visualizan en la siguiente ilustración.

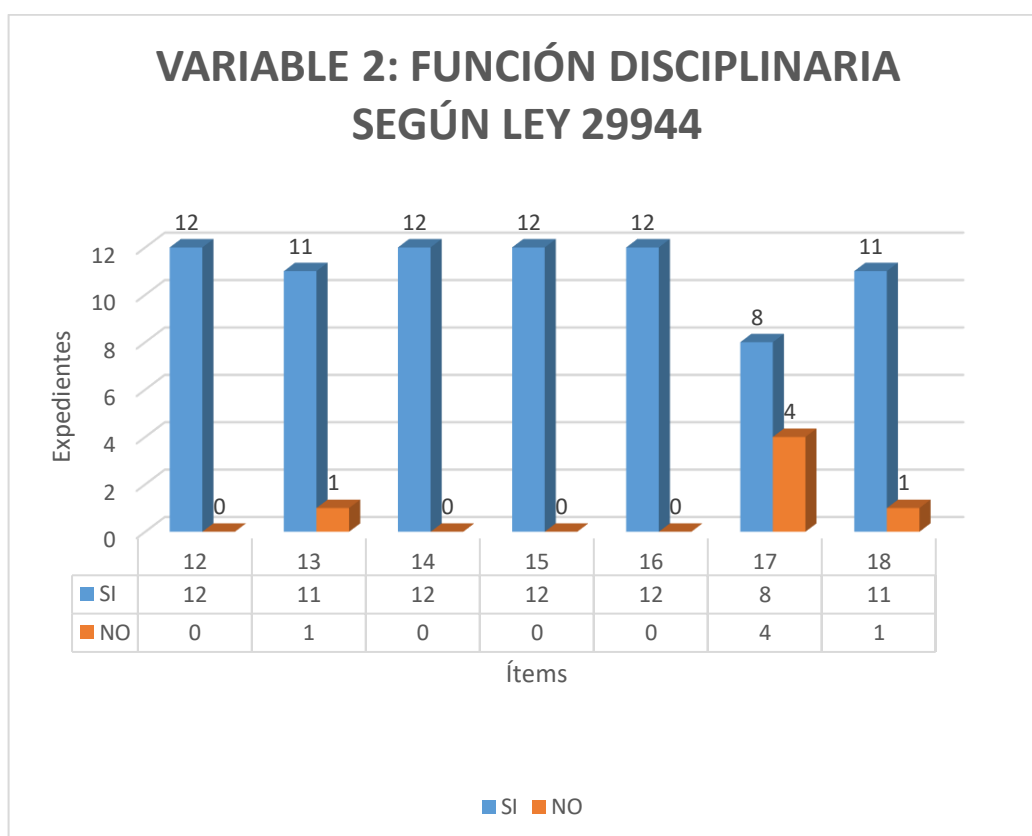


Ilustración 2:

Resultados del análisis de expedientes revisados de la UGEL Chupaca (2019).

En cuanto a la dimensión de Nivel de atribución de la Potestad sancionadora establecida en la ley 29944 a los directores de Instituciones Educativas, se tienen los siguientes resultados de la aplicación de la ficha de análisis de documentos, lo que nos permite visualizar los siguientes resultados:

Tabla 5:

Tabulación de resultados del nivel de la potestad sancionadora establecida en la ley

PREGUNTAS	ALTERNATIVAS				TOTAL	
	SI		NO			
	No	%	No	%	No	%
En el expediente se evidencia que la autoridad quien otorga la sanción es quien determina la Ley 29944, según el tipo de trabajador y el tipo de sanción aplicada?	1	92	1	8	2	100

Fuente: Ficha de observación de expedientes aplicada a muestra de UGEL Chupaca, (2019).

Interpretación:

Con respecto al ítem 13, tenemos 11 expedientes revisados, que hacen un 98%, que evidencian que la autoridad quien otorga la sanción es quien determina la Ley 29944, según el tipo de trabajador y el tipo de sanción aplicada, por otro lado, hay un 1 expediente que hace un 8% que evidencia que correspondía sancionar al director, quien lo realiza y al mismo tiempo también lo hace la Ugel Chupaca.

Es necesario resaltar que no hubo evidencia de la comunicación al procesado sobre la determinación de la comisión permanente para retomar el caso y administrar la segunda sanción, quedando en riesgo el derecho de defensa.

Con respecto a los tipos de conductas sancionables administrativamente previstos en la ley se tiene los siguientes resultados:

Tabla 6:

Tabulación de resultados de tipos de conductas sancionables administrativamente previstos por la ley.

PREGUNTAS	ALTERNATIVAS				TOTAL	
	SI		NO			
	No	%	No	%	No	%
¿En el expediente, la falta identificada está tipificada dentro de la Ley 29944?	12	100	0	0	12	100
¿La falta cometida por el procesado está contemplada en forma clara por la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 como falta leve, no tan leve, grave o muy grave?	12	100	0	0	12	100
¿La sanción que se aplica a los docentes en educación se encuentra regulados plenamente en la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944?	12	0	0	0	12	100

Fuente: Ficha de observación de expedientes aplicada a muestra de UGEL Chupaca, (2019).

Interpretación

Con respecto al ítem 14, tenemos 12 expedientes que hacen el 100%, que tipifican la falta según lo dispuesto en la Ley 29944. Con respecto al ítem 15, tenemos 12 expedientes que hacen el 100%, en la que se demuestra que la falta cometida está contemplada en la ley 29944.

Con respecto al ítem 16, tenemos 12 expedientes que hacen el 100%, en la que se demuestra que la falta sancionada se encuentra regulada plenamente en la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944.

Por otro lado, con respecto a la Correcta atribución de la potestad sancionadora establecida en la ley, se presentaron los siguientes resultados.

Tabla 7:

Tabulación de resultados sobre la correcta atribución de la potestad sancionadora

establecida en la ley.

PREGUNTAS	ALTERNATIVAS				TOTAL	
	SI		NO			
	No	%	No	%	No	%
¿El expediente evidencia que la autoridad que inicia el proceso sancionador realiza las acciones de investigación pertinentes para determinar el objeto del procedimiento sancionador adecuadamente?	8	67	4	33	12	100
El expediente evidencia que la aplicación de la sanción pondera adecuadamente los atenuantes	11	92	1	8	12	100

Fuente: Ficha de observación de expedientes aplicada a muestra de UGEL Chupaca (2019)

Interpretación

Con respecto al ítem 17, tenemos 8 expedientes revisados, que hacen el 67%, que evidencian que la autoridad que inicia el proceso sancionador realiza las acciones de investigación pertinentes para determinar el objeto del procedimiento sancionador adecuadamente. Por otro lado, 4 expedientes que hacen el 33% en los que la autoridad solamente se remite a las evidencias que muestra el procesado, sin realizar acciones que implementen mejor la investigación.

4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y PRUEBA DE HIPÓTESIS

Con el propósito de proceder al contraste de hipótesis es preciso realizar la prueba de normalidad con el fin de determinar la procedencia de la distribución de los datos, esto es si provienen de una distribución paramétrica o, en su defecto, de una distribución no paramétrica, y de esta manera utilizar el estadístico correspondiente al contraste de hipótesis.

Tabla 8:

Prueba de normalidad de las variables Debido proceso y Función disciplinaria según Ley 29944.

	Kolmogorov-Smirnov a		
	Estadístico	Gl	Sig.
Debido proceso	,236	96	,000
Función disciplinaria según Ley 29944	,293	96	,000

Fuente: base de datos (2019), Corrección de significación de Lilliefors

Interpretando la tabla 15 se aprecia la variable debido proceso con un estadístico K-S = 0.236, $p = .000 < .05$, de modo que se rechaza la hipótesis de normalidad de los datos ($p > .05$); de la misma manera, ocurre para la variable función disciplinaria según Ley 29944, cuyo estadístico K-S = 0.293, $p = .000 < .05$, por tanto, también se rechaza la hipótesis de normalidad de los datos ($p > .05$). De manera que los datos de ambas variables son de índole no paramétricos, razón por el cual es necesario aplicar como estadístico en el contraste de hipótesis la Rho de Spearman. Finalmente, para establecer una interpretación de los resultados resulta pertinente considerar la siguiente tabla.

Tabla 9:

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman.

Valor de Rho	Significado
-0.9 a -0.99	Correlación negativa muy alta
-0.7 a -0.89	Correlación negativa alta
-0.4 a -0.69	Correlación negativa moderada
-0.2 a 0.39	Correlación negativa baja
-0.01 a -0.19	Correlación negativa muy baja
0	Correlación nula
0.01 a 0.19	Correlación positiva baja
0.2 a 0.39	Correlación positiva baja
0.4 a 0.69	Correlación positiva moderada
0.7 a 0.89	Correlación positiva alta
0.9 a 0.99	Correlación positiva muy alta

Fuente: Martínez y Campos (2015, p. 185).

Contrastación de la hipótesis general.

H₀: La aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental incide negativamente en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la Ugel Chupaca, 2019

H_a: La aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental incide positivamente en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la Ugel Chupaca, 2019

H₀: $\rho = 0$

H₁: $\rho \neq 0$

Prueba estadística: Rho de Spearman

Nivel de significancia $\alpha = 0.05$

Regla de decisión: Si $\rho \leq 0.05$ se rechaza H₀

Tabla 10:

Prueba de Spearman de Debido proceso y Función sancionadora según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

		Debido proceso	Función sancionadora según Ley 29944
Rho de Spearman	Debido proceso	Coeficiente de correlación	de 1,000 ,684**
		Sig. (bilateral)	. ,000
		N	96 96
	Función sancionadora según Ley 29944	Coeficiente de correlación	de ,684** 1,000
		Sig. (bilateral)	,000 .
		N	96 96

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente propia (2019)

Interpretación

Los datos de la tabla referidos a la hipótesis general muestran un coeficiente de correlación Rho de Spearman = .684** (positiva y moderada) y un valor de $p = ,000$ el cual es menor al nivel de significancia de 0,05 por el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación significativa entre el debido proceso y la función sancionadora según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

Contrastación de las hipótesis específicas.

Hipótesis específica 1

Ho: La observancia al debido proceso incide negativamente en la previsión las consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado, según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

Ha: La observancia al debido proceso incide positivamente en la previsión las consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado, según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

Ho: $p = 0$

He: $p \neq 0$

Prueba estadística: Rho de Spearman

Nivel de significancia $\alpha = 0.05$

Regla de decisión: Si $p \leq 0.05$ se rechaza H_0

Tabla 11:

Prueba de Spearman debido proceso y previsión de las consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado según Ley

			Debido proceso	Previsión de las consecuencias administrativas
Rho de Spearman	Debido proceso	Coefficiente de correlación	1,000	,610**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	96	96
	Previsión de las consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado	Coefficiente de correlación	,610**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	96	96

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente propia (2019)

Interpretación

Los datos de la tabla referidos a la hipótesis específica 1 muestran un coeficiente de correlación Rho de Spearman = .610** (positiva y moderada) y un valor de $p = ,000$ el cual es menor al nivel de significancia de 0,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación significativa entre la planificación el debido proceso y la previsión de las consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado, según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

Hipótesis específica 2

Ho: El cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional incide negativamente en el tipo de conductas sancionadoras administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

Ha: El cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional incide positivamente en el tipo de conductas sancionadoras administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

Ho: $p = 0$

He: $p \neq 0$

Prueba estadística: Rho de Spearman

Nivel de significancia $\alpha = 0.05$

Regla de decisión: Si $p \leq 0.05$ se rechaza H0

Tabla 12:

Prueba de Spearman el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional y el tipo de conductas sancionadoras administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

			El cumplimiento de los procedimientos	El tipo de conductas sancionadoras administrativas
Rho de Spearman	El cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional	Coeficiente de correlación	1,000	,608**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	96	96
	El tipo de conductas sancionadoras administrativamente previstas en la Ley 29944	Coeficiente de correlación	,608**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	96	96

** . La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Fuente propia (2019)

Interpretación

Los datos de la tabla referidos a la hipótesis específica 2 muestran un coeficiente de correlación Rho de Spearman = .608** (positiva y moderada) y un valor de $p = ,005$ el cual es menor al nivel de significancia de 0,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación significativa entre el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional y el tipo de conductas sancionadoras administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019

Hipótesis específica 3

Ho: El reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos, incide negativamente en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

Ha: El reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos, incide positivamente en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

Ho: $p = 0$

He: $p \neq 0$

Prueba estadística: Rho de Spearman

Nivel de significancia $\alpha = 0.05$

Regla de decisión: Si $p \leq 0.05$ se rechaza H_0

Tabla 13:

Prueba de Spearman el reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos y atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.

			Reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos	Atribución de la potestad sancionadora
Rho de Spearman	Reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos	Coeficiente de correlación	1,000	,693**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	96	96
	Atribución de la potestad sancionadora	Coeficiente de correlación	,693**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	96	96

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Fuente propia (2019)

Interpretación

Los datos de la tabla referidos a la hipótesis específica 3 muestran un coeficiente de correlación Rho de Spearman = .693** (positiva y moderada) y un valor de $p = ,000$ el cual es menor al nivel de significancia de 0,05 por lo cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, existe relación significativa entre el reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos y la atribución de la potestad sancionadora, Ugel Chupaca, 2019.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.

El objetivo de la investigación fue establecer la incidencia de la aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la Ugel Chupaca, 2019. Realizándose un trabajo de campo que consistió en revisar la muestra de expedientes con sentencia firme en el año 2019, de la Ugel Chupaca, que consistió en la aplicación de una ficha de revisión de documentos, que fueron debidamente validados por juicio de expertos se obtuvo evidencia empírica debidamente organizada en una matriz de datos, con la cual se efectuó luego el contraste o falsación de las hipótesis de investigación.

Con respecto a la hipótesis general: Existe relación significativa entre el debido proceso y la función sancionadora según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019, sin embargo, hay un riesgo como menciona Morales (2016), cuando los sumarios administrativos de docentes están supeditados al conocimiento de la normativa de los servidores públicos encargados de procesarlo o como lo sentencia Uriol (2014) cuando las autoridades encargadas de los procesos disciplinarios, se limitan a las pruebas ofrecidas por el procesado, sin aportar nuevas pruebas, como producto de su investigación del caso, lo cual podría terminar vulnerando el derecho a un debido proceso. En este aspecto queda abierta posibilidad de continuar las investigaciones en cuanto a la eficacia y la verdad material de los medios probatorios en los procesos disciplinarios en mérito a la Ley 29944.

Con respecto a la hipótesis específica 1: Se corroboró que la observancia al debido proceso incide positivamente en la previsión las

consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado, según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019. Resultando un coeficiente de correlación Rho de Spearman = .610** (positiva y moderada), validándose la hipótesis alterna. Al respecto se coincide con Duran (2014) cuando concluye que la facultad disciplinaria es la más importante manifestación del *Ius Puniendi* del Estado; que corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de la eficiencia, moralidad, economía y transparencia. De aquí la importancia de respetar las garantías del debido proceso administrativo.

Con respecto a la hipótesis específica 2: El cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional incide positivamente en el tipo de conductas sancionadoras administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019, refrendada por un coeficiente de correlación Rho de Spearman = .608** (positiva y moderada), coincidiendo con Escobar (2013) quien afirma que las normas tipifican las faltas y sanciones, así como a los responsables de impartirla (Director, Dirección de recursos humanos, Ministro de educación con autorización del Tribunal de la Carrera del Docente y del Tribunal de Servicio Civil). Por lo que existe un manual de régimen disciplinario para directores. Sin embargo, se da alerta de que no se especifican las faltas leves, quedando un vacío que podría vulnerar la ejecución adecuada de la potestad disciplinaria, así como las garantías constitucionales del procesado.

Con respecto a la hipótesis específica 3: El reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos, incide positivamente en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019, refrendado por un coeficiente de correlación Rho de Spearman = .693** (positiva y moderada), coincidiendo con Zevallos (2018), de que el respeto a los derechos de los procesados garantiza que ellos mismos acepten las sanciones establecidas en la Ley 29944.

CONCLUSIONES

1. Existe relación significativa entre el debido proceso y la función sancionadora según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019, al respecto la norma se fundamenta en el derecho administrativo, respetando las garantías del debido procedimiento administrativo, que son respetadas en cuanto quien ejerza la potestad sancionadora tenga conocimiento de la misma, quedando el riesgo de no ser cumplida puesto que los directivos no siempre tienen una formación en derecho.
2. Se corroboró que la observancia al debido proceso incide positivamente en la previsión las consecuencias administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado, según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019. Resultando un coeficiente de correlación Rho de Spearman = .610** (positiva y moderada), En la que se considera todos los derechos y garantías del procedimiento administrativo, principalmente el derecho a exponer argumentos en forma escrita y/o verbal para dar razón de sus motivaciones y justificaciones ante los hechos que se le imputen, el derecho a ofrecer pruebas o exigir que la administración los produzca, el derecho a una decisión motivada y fundada en derecho. En este sentido, en los procesos investigados se evidencia que principalmente se basaron en las pruebas ofrecidas por los procesados, quedando poca producción de pruebas por parte de la administración.
3. El cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional incide positivamente en el tipo de conductas sancionadoras administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019, refrendada por un coeficiente de correlación Rho de Spearman = .608** (positiva y moderada), en este sentido, la responsabilidad disciplinaria de los docentes recae sobre los directivos, sin embargo, en la mayoría de casos los directores los trasladan a la Ugel por falta de orientación en la aplicación de medidas disciplinarias, luego la comisión responsable de la Ugel las revisa y las remite

nuevamente a los directivos responsables, causando demora en los procesos.

4. El reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos, incide positivamente en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019, refrendado por un coeficiente de correlación Rho de Spearman = .693** (positiva y moderada), El cumplimiento de los plazos, las notificaciones oportunas a las partes, los procesos de investigación llevados a cabalidad permiten evitar la nulidad de los procesos, las impugnaciones y la judicialización de los procesos.

RECOMENDACIONES

1. Es necesario que la Ugel Chupaca capacite a los directivos en derecho administrativos y procesos disciplinarios con el fin de orientarlos adecuadamente y prevenir la nulidad de sanciones, con ello la vulneración de los derechos de los docentes procesados.
2. Se recomienda que, en los procesos de investigación, las autoridades también procuren producir pruebas necesarias que permitan cuidar la verdad material de los medios probatorios, reduciendo las subjetividades.
3. Se recomienda la difusión de las faltas, procedimientos y plazos en los procesos disciplinarios con el fin de que los docentes conozcan sus derechos y puedan ejercer adecuadamente su derecho a defensa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ANACLETO G., V. (2008) “Guía de procedimientos administrativos y del proceso contencioso administrativo”. 4° Edición. Lima-Perú: Editorial Grijley E.I.R.L.
2. BOLAÑOS, J. (2006) “Derecho Disciplinario Policial”, 1° Edición. San José-Costa Rica: Editorial Universidad Estatal a Distancia.
3. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (1999), Opinión Consultiva OC-16/99 del 1 de octubre de 1999, “El derecho a la Información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal”, párr. 118.
4. DROMÍ, R. (1998). Derecho Administrativo. Buenos Aires: Ciudad Argentina, p. 241.
5. DURAN P., N. (2014), PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO AL PERSONAL DOCENTE DE ACUERDO AL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO CASO: ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO DE CARABOBO, Tesis para optar el grado de Magister, Universidad José Antonio Páez, Venezuela. Recuperado el 02/09/19 de:
<https://bibliovirtualujap.files.wordpress.com/2011/04/neysiduran.pdf>
6. ESCOBAR E., W., (2013), RÉGIMEN DISCIPLINARIO DOCENTE APLICADO EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE, Tesis para optar el grado de Licenciatura, Universidad de Costa Rica, Costa Rica. Recuperado el 03/09/19 de: <https://ijj.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2017/06/R%C3%A9gimen-Disciplinario-Docente-en-la-Educaci%C3%B3n-P%C3%BAblica-costarricense.pdf>
7. GARCÍA G., J.R., (2017), PRINCIPIOS DELIMITADO RES DE LA POTESTAD SANCIONADORA Y SU APLICACIÓN EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS EN LA UGEL DE CORONEL PORTILLO 2016, Tesis para optar el título de abogado, Universidad Privada de Pucallpa, Perú. Recuperado el 03/09/19 de:

<https://es.scribd.com/document/360877573/Proceso-Admin-Istrativo-Disciplinario-en-Ugel-Pucallpa>

8. JIMÉNEZ V., J. (2007) “¿Qué es el Debido Procedimiento Administrativo?” Revista Actualidad Jurídica, Gaceta Jurídica, T. 167, Lima, octubre, pp. 166-170.
9. LANDA A., C. (2012), El derecho al debido proceso en la jurisprudencia, corte suprema de justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Volúmen 1, pg. 17.
10. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2016), “Manual de Régimen Disciplinario para Directores de Instituciones Educativas Públicas”, Tercera Edición, Julio.
11. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL PERÚ (2018), Ley de la Reforma Magisterial No 29944 y su Reglamento aprobado por D.S. No 004-2013-ED, Lima.
12. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DEL PERÚ (2013), Guía sobre la aplicación del Principio-Derecho del Debido Proceso en los procedimientos administrativos, Dirección General de Desarrollo y Ordenamiento Jurídico, Lima.
13. MORALES C., M. (2016), ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL DEBIDO PROCESO EN LOS SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DE DOCENTES, Tesis de Maestría, Universidad San Francisco de Quito USFQ, Ecuador. Recuperado el 05/09/19 de: <http://repositorio.usfq.edu.ec/bitstream/23000/6256/1/128448.pdf>
14. MORÓN U., J. (2001): “Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo General”. 9º Edición: Lima-Perú: Editorial Gaceta Jurídica E.I.R.L.
15. SAGÜÉS, N. (1993), Elementos de Derecho Constitucional. Volumen 2, Buenos Aires: Astrea, p. 328.
16. SANÍN G., J. (1993), sentencia T–001 del 12 de enero, ponencia, pg 6.
17. SUÁREZ S., A. (2001), El debido proceso penal, 2ª edición, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, pág. 193.

18. TEXTO UNICO ORDENADO de la Ley 27444 (2017), Ley del Procedimiento Administrativo General, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima.
19. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (2002), Sentencia del 6 de agosto, recaída en el Expediente N° 1109-2002-AA/TC, fundamentos jurídicos 19-20. Sentencia del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, fundamento jurídico 13.
20. URIOL R., J. F. (2014), UTILIZACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS EN EL SECTOR EDUCACIÓN Y SU AFECTACIÓN AL DEBIDO PROCEDIMIENTO, Tesis para optar el grado de Maestro, Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Recuperado el 02/09/19 de: <http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/7558>
21. VENTURA M., F., (2014), EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ADMINISTRATIVO, A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE CHURCAMPÁ 2014, Tesis para optar el Título profesional, Universidad Nacional de Huancavelica, Perú. Recuperado el 03/09/19 de: <http://repositorio.unh.edu.pe/bitstream/handle/UNH/368/TP%20%20UNH%20DERECHO%200013.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
22. ZEVALLOS H.A.,(2018) EL PROCESO SANCIONADOR Y SU RELACIÓN EN EL DESEMPEÑO DOCENTE, EN LA OROYA 2017, Tesis para optar el Título profesional de Abogado, Universidad de Huanuco, Perú.

ANEXOS

Año de lucha contra la corrupción y la impunidad

Huánuco, 2 de diciembre de 2019

Inf. N° 29-2019-UDH/FD-CAT/FPel.

Sr. Dr. FERNANDO CORCINO BARRUETA

Director de la Escuela Académico Profesional de Derecho.

ASUNTO: Aprobación de Informe Final de Investigación de Edith
Dinna CHACCA VELEZ.

REF. CATP – 2019 - II.

Es honroso dirigirme a usted en mi condición de docente de asesoramiento de tesis del programa CATP, para informarle que la Bachiller Edith Dinna CHACCA VELEZ, estudiante del programa, ha elaborado su Informe Final de investigación titulado: DEBIDO PROCESO Y FUNCIÓN DISCIPLINARIA SEGÚN LEY 29944, UGEL CHUPACA, 2019.

El mencionado Informe Final, se ha elaborado de acuerdo al esquema de informe final de investigación de la Facultad y reúne las condiciones mínimas para ser aprobado; y además se ha evaluado de acuerdo a los indicadores de evaluación para la aprobación de un Informe final de investigación.

En tal sentido, informo a usted que el mencionado Informe Final de Investigación ha sido aprobado; y en consecuencia, la tesista está en condiciones de sustentar su tesis para optar el título de Abogada.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y demás fines.

Atentamente,

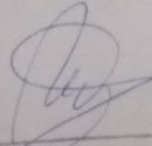

Félix Ponce e Ingunza
Magister en Investigación y Juvenia Superior
Doctor en Ciencias de la Educación



Ilustración 3

Oficio de Aprobación del informe final.



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 27%

Date: jueves, diciembre 12, 2019

Statistics: 4376 words Plagiarized / 16287 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS TESIS
"DEBIDO PROCESO Y FUNCIÓN DISCIPLINARIA SEGÚN LEY 29944, UGEL CHUPACA,
2019" Para optar el Título Profesional de ABOGADO TESIS: Bach. Edith Dinna CHACA
VÉLEZ ASESOR: Dr. Félix PONCE E INGUNZA HUÁNUCO – PERÚ 2019 DEDICATORIA: A
mi padre, quien siempre me acompaña y anima... A mi madre, quien me impulsa a ser
mejor cada día...

A Wolfgang y Alexander mi inspiración constante.

Ilustración 4

Resultado del Turniting

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TITULO: DEBIDO PROCESO Y FUNCIÓN DISCIPLINARIA SEGÚN LEY 29944, UGEL CHUPACA, 2019

PROBLEMA	OBJETIVO	HIPOTESIS	VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES	METODOLOGÍA
¿De qué manera la aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental incide en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la UGEL Chupaca, 2019?	Establecer la incidencia de la aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la Ugel Chupaca, 2019.	La aplicación del principio del debido proceso como derecho fundamental incide positivamente en el control de la función disciplinaria según Ley 29944 en la Ugel Chupaca, 2019.	V1: DEBIDO PROCESO Definición operacional: Es el derecho por el cual en todo proceso administrativo se respetan todos los derechos humanos del procesado.	Grado de observancia al debido proceso Cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional. Reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos	Cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional Nivel de actuación dentro de las facultades atribuidas en la ley. Nivel de reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos	TIPO: Sustantivo ENFOQUE: Holístico NIVEL: Explicativo

					<p>Nivel de sometimiento a lo que la ley establece.</p> <p>Nivel de atribución de facultades de actuación.</p>	<p>DISEÑO:</p> <p>Descriptivo - Transversal</p> <p>POBLACIÓN</p> <p>12 expedientes con sanción firme de la Ugel Chupaca.</p> <p>MUESTRA:</p> <p>12 expedientes con sanción firme de la Ugel Chupaca.</p>
a) ¿De qué manera la observancia al debido proceso incide en la previsión de las consecuencias administrativas que	a) Establecer la incidencia de la observancia del debido proceso incide en la previsión de las consecuencias	a) La observancia al debido proceso incide positivamente en la previsión las consecuencias administrativas que	<p>V2: FUNCIÓN DISCIPLINARI A SEGÚN LEY 29944</p> <p>Definición operacional:</p>	<p>Nivel de atribución de la Potestad sancionadora establecida en la ley.</p> <p>Tipos de conductas sancionables</p>	<p>Nivel de previsión de las consecuencias administrativas que no afecten la libertad del administrado</p>	<p>12 expedientes con sanción firme de la Ugel Chupaca.</p> <p>TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE</p>

<p>no afecten la libertad y los derechos del administrado según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019?</p> <p>b) ¿De qué manera el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional incide en el tipo de conductas sancionadora administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019?</p> <p>c) ¿Cómo el</p>	<p>administrativas que no afecten la libertad y los derechos del administrado según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.</p> <p>b) Establecer la incidencia del cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional de la conducta sancionadora administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.</p> <p>c) Establecer la incidencia del</p>	<p>no afecten la libertad y los derechos del administrado, según Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.</p> <p>b) El cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional incide positivamente en el tipo de conductas sancionadoras administrativamente previstas en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.</p> <p>c) El reconocimiento y</p>	<p>Es la facultad por la cual la autoridad sanciona a los trabajadores cuando incumplen sus funciones.</p>	<p>administrativamente previstos en la ley.</p> <p>Correcta atribución de la potestad sancionadora establecida en la ley</p>	<p>Tipos de conductas sancionables administrativamente previstos en la ley.</p> <p>Nivel de atribución de la Potestad sancionadora establecida en la ley.</p> <p>Nivel de especificación de las disposiciones reglamentarias dirigidas a identificar conductas o sanciones.</p> <p>Nivel de las infracciones</p>	<p>RECOPILACIÓN DE DATOS:</p> <p>Observación</p> <p>Ficha de observación de expedientes</p> <p>TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS:</p> <p>Estadística descriptiva, cuadros</p> <p>Análisis y fichas de análisis.</p>
--	---	--	--	--	--	--

reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos, incide en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019?.	reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.	tutela de los derechos públicos de los ciudadanos, incide positivamente en la atribución de la potestad sancionadora establecida en la Ley 29944, Ugel Chupaca, 2019.			administrativas, no permiten interpretación extensiva o analogías. Nivel de la sanción administrativa a los responsables de acuerdo a Ley.	
---	--	---	--	--	---	--

FICHA DE OBSERVACIÓN DE EXPEDIENTES

INSTRUCCIONES: Revisa el expediente, revisa los ítems y marca según corresponda, si en el caso que cumpla y no en el caso que incumpla.

DIMENSIÓN	VARIABLE: DEBIDO PROCESO	Exp...		Exp...		Exp...		Exp...		Exp...	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
Grado de observancia al debido proceso	1. En la aplicación de la sanción ¿Las autoridades o directivos de la Ugel Chupaca se respetaron las garantías constitucionales?										
	2. El expediente evidencia que la autoridad quien inicia la investigación notifica oportunamente al procesado										
	3. ¿El expediente evidencia que se cumplieron los plazos correspondientes en cada procedimiento, establecidos según norma (Descargo, investigación)?										
	4. En el expediente se evidencia que el procesado tuvo acceso a las copias de lo actuado oportunamente para ejercer su defensa.										
	5. El expediente evidencia que los medios probatorios alcanzados por										

	el procesado en su descargo fueron considerados en la investigación										
	6. En el expediente ¿La resolución de sanción explica el motivo de sanción y las razones que la sustentan?										
	7. En el expediente ¿Las acciones respetan el principio Ne bis in ídem (No ser enjuiciado ni sancionado dos veces por la misma falta)?										
Cumplimiento de los procedimientos establecidos en el ámbito jurisdiccional.	8. En el expediente ¿La investigación considera y brinda al procesado derecho a declarar sus argumentos?										
	9. En el expediente ¿Se consigna el derecho al procesado a brindar pruebas?										
	10. En el expediente ¿La resolución de sanción consigna gradualidad entre la falta y la sanción?										
Reconocimiento y tutela de los derechos públicos de los ciudadanos	11. ¿Se cumple con la absolución de Recursos impugnatorios presentados por los Docentes sancionados de la UGEL Chupaca dentro del plazo legal?										
	12. ¿Cumple en su oportunidad, el titular de la UGELChupaca, emitir el Acto Resolución de sanción?.										

DIMENSIÓN	VARIABLE: FUNCIÓN SANCIONADORA										
Nivel de atribución de la Potestad sancionadora establecida en la ley.	13. En el expediente se evidencia que la autoridad quien otorga la sanción es quien determina la Ley 29944, según el tipo de trabajador y el tipo de sanción aplicada?										
Tipos de conductas sancionables administrativamente previstos en la ley	14. ¿En el expediente, la falta identificada está tipificada dentro de la Ley 29944?										
	15. ¿La falta cometida por el procesado está contemplada en forma clara por la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 como falta leve, no tan leve, grave o muy grave?										
	16. ¿La sanción que se aplica a los docentes en educación se encuentra regulados plenamente en la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944?										
Correcta atribución de la potestad	17. ¿El expediente evidencia que la autoridad que inicia el proceso sancionador realiza las acciones de investigación pertinentes para determinar el objeto del procedimiento sancionador										

sancionadora establecida en la ley	adecuadamente?										
	18. El expediente evidencia que la aplicación de la sanción pondera adecuadamente los atenuantes										
TOTAL											